



MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

**VACÍO LEGAL DEL D.S. N° 090-2002-PCM Y EL ART. 33 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y LOS
MECANISMOS EN LA DESIGNACIÓN DE CORREDORES DE SEGUROS EN DOS
INSTITUCIONES PÚBLICAS EN EL PERIODO 2017-2018**

PRESENTADO POR:

**MAGALY KARIN GASTAÑETA ROJAS
EDUARDO YONNEL MEZA FARFAN**

**PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO EN GESTIÓN PÚBLICA**

ASESOR: SAMUEL ENRIQUE RIVERA VÁSQUEZ

LIMA – PERÚ

2019

DEDICATORIA

Magaly Karin Gastañeta Rojas

A mis hijos, a Victor, a mi padre, a mi madre y a todos
aquellos que siempre han confiado y orado por mí.

Eduardo Yonnel Meza Farfán

A mis padres, a mi abuela y a mi hermano, quienes
me han proporcionado su apoyo durante mi
trayectoria profesional.

INDICE

INDICE DE TABLAS	1
RESUMEN	2
ABSTRACT	3
CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
1.1. Situación Problemática	4
1.2. Preguntas de investigación	6
1.2.1. Pregunta General	6
1.2.2. Preguntas Específicas	6
1.3. Objetivos de la Investigación	7
1.3.1. Objetivo General	7
1.3.2. Objetivos Específicos	7
1.4. Justificación	8
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	10
2.1. Antecedentes de la Investigación	10
2.1.1 Antecedentes Internacionales	10
2.1.2. Antecedentes Nacionales	10
2.2. Bases Teóricas	11
2.2.1. El Seguro y las aseguradoras locales:	11
2.2.2. La transferencia del Riesgo:	13
2.2.3. La intermediación en seguros "Corredores de Seguros"	15
2.2.4. Vacío legal o laguna jurídica	18

2.2.5. Opinión N.º 184-2018-DTN Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)	19
2.2.6. Características del D.S. N.º 090-2002-PCM y la conveniencia de su aplicación	24
2.2.7. Ley de Contrataciones del Estado, Ley N.º 30225 y sus modificatorias	25
2.2.8. Otras normas aplicables a la contratación e intermediación de seguros	25
2.2.9. Otras normas aplicables a la contratación de Seguros en el estado	26
2.3. Operacionalización de variables	27
CAPÍTULO III. METODOLOGÍA	28
3.1. Tipo y Diseño	28
3.2. Población y Muestra	28
3.3. Técnicas e Instrumentos	29
3.4. Procedimiento o levantamiento de información	30
CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS	31
4.1. Resultados y análisis de la variable: "Vacío legal"	31
4.2. Resultados y análisis de la variable: "Mecanismos en la designación de Corredores de Seguros"	33
CAPITULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN	38
5.1. Conclusiones.....	38
5.2. Recomendaciones	40
BIBLIOGRAFIA	42

INDICE DE TABLAS

Tabla N° 01: Empresas aseguradoras que conforman el Sistema Asegurador peruano

Tabla N° 02: Participación de empresas aseguradoras según primas de seguros netas

Tabla N° 03: Ranking de Corredores de Seguros (P. Jurídicas), a julio del 2018

Tabla N° 04: Operacionalización de variables

Tabla N° 05: Personal encargado de las contrataciones de los Seguros de Propiedad y designación de Corredor de Seguros en dos entidades públicas

RESUMEN

En los últimos años, producto del crecimiento del mercado de seguros en nuestro país; y el incremento de los bienes patrimoniales del estado, se ha ido desarrollando una tendencia por asegurar dichos bienes, de manera que cuando surja un incidente debido a una afectación circunstancial, acto vandálico o fenómeno de la naturaleza, técnicamente conocido como "siniestro"; la entidad afectada reciba una indemnización por las pérdidas o daños ocurridos, respecto de los bienes que tuvo a bien asegurar de forma oportuna.

Debido a la especialización de los seguros y la adecuada calificación de los siniestros surge la necesidad de contar con un Corredor de Seguros, quien debe brindar la información pertinente y suficiente en la promoción, oferta, suscripción de los contratos y liquidación de siniestros; así como, un asesoramiento profesional en el curso de su actividad.

El D.S. N.º 090-2002-PCM, promulgado y publicado el 09 de setiembre del 2002 y el Art. 33 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado el 29 de diciembre del 2018, hacen mención a la viabilidad de contar con los servicios del Corredor de Seguros y que, a su vez, debe materializarse a través de una "Carta de Nombramiento". No obstante, no precisa que dicho nombramiento deberá ejecutarse como resultado de un concurso público, con sus respectivos términos de referencia. Esta situación o vacío de la norma ha conllevado a que algunas entidades realicen la designación del Corredor de Seguros a elección facultativa o discrecional por parte del titular o encargado de la Administración de la entidad, pues se asume que al tratarse de un servicio "ad honorem" no conlleva a una irrogación que afecta los fondos públicos, tema que pondremos en discusión.

PALABRAS CLAVE: Vacíos legales, Corredor de Seguros, D.S. N° 090-2002-PCM, Ley N° 30225.

ABSTRACT

In recent years, product of the evolution in the insurance market of our country; as well as the increase of the patrimonial assets of the state, a tendency has been developed to insure said assets; so that when an incident arises due to a circumstantial affectation, vandalism act or phenomenon of nature, technically known as "sinister", the affected entity receives a compensation for the losses or damages that occurred, with respect to the goods that it had to ensure in a timely manner. Due to the specialization that involves the contracting of insurance and the proper qualification of the claims, there is a need to have insurance brokers, who must offer truthful and sufficient information in the promotion, offer, subscription of contracts and liquidation of claims; as well as professional advice in the course of its activity.

The D.S. N° 090-2002-PCM, promulgated and published on September 9, 2002 and the Regulation of Law N° 30225, State Contracting Law, amended on December 29, 2018; they mention the need to hire the services of the insurance broker; which must be done through a letter of appointment. However, it does not specify that said appointment must be executed as a result of a public tender, with the respective terms of reference. This situation or void of the rule has led to some entities make the designation of the insurance broker optional or discretionary choice by the owner, it is assumed that being an "ad honorem" service does not lead to an embezzlement of public funds, topic that we will discuss.

CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Situación Problemática

La modernización del estado peruano se establece bajo un enfoque de Gestión por Resultados, desarrollando su actividad respecto al control de la ejecución del gasto, la descentralización y la tercerización de los servicios públicos; entre otros. Tal situación requiere un monitoreo dedicado al control de las gestiones, esto a su vez, genera diversas situaciones identificándose entre ellas las que tienen vacíos legales, concebidos en el afán de normar los procesos. En esta línea de ideas, el D.S. N° 090-2002-PCM que, "*... autoriza a organismos estatales a la contratación de seguros en forma directa o con la intervención de corredores de seguros...*", y el Art. N.º 33 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado; señalan la necesidad de contratar seguros que cubran el daño o pérdida ocasionado a los bienes previamente asegurados de las entidades públicas.

Los considerandos de la normativa antes señalada precisan también: "*...podrán contratar sus seguros en forma directa o con la intervención de los Corredores de Seguros...*"; y "*... el Corredor de Seguros nombrado, según carta de nombramiento correspondiente...*", en ambas normas respectivamente. La materialización de esta figura la define como la persona (natural o jurídica) debidamente acreditada y capacitada para operar como mediador o representante entre el asegurado y asegurador. Al respecto, la legislación peruana prevé también la figura del intermediario, Corredor o "broker" de Seguros, quien ha aprobado exámenes de competencia y cumplido con los requisitos que la normativa solicita, así como encontrarse debidamente habilitado para el ejercicio de sus actividades.

Como se observa, la normativa no ha precisado que el servicio del Corredor de Seguros corresponde a una asesoría técnica – profesional; por lo tanto, debe relacionarse a un servicio contratado, el mismo que se define a través de un procedimiento de selección y un sistema de contratación, conforme a ley y su ámbito de aplicación. En ese sentido, algunas entidades han optado por normalizar esta situación generando directivas y/o lineamientos para su designación. Sin embargo, esto lo realizan como iniciativa, al no encontrarse enmarcado en una exigencia de la norma.

Ante lo señalado, hemos realizado un análisis situacional a la Oficina General de Abastecimiento y Oficina de Abastecimiento, encargadas de las contrataciones, de dos entidades públicas, las mismas que han decidido no establecer lineamientos en la elección de sus Corredores de Seguros, sino más bien la elección ha sido potestativa por el titular, pues es quien autoriza y firma la mencionada "carta de nombramiento".

Finalmente, consideramos que esta facultad deja un espacio libre o vacío legal que pudiera generar criterios subjetivos para la elección del mismo, que a su vez puedan conllevar a situaciones de corrupción debido por un lado a, los porcentajes de comisión que las aseguradoras entregan a los Corredores de Seguros por su servicio de agenciamiento; y por otro, a la contratación de aquellos que no cuentan con las capacidades técnicas, solvencia económica, solvencia moral demostrable y soporte tecnológico que permitan una adecuada administración de los seguros de propiedad en las entidades públicas.

1.2. Preguntas de investigación

1.2.1. Pregunta General

¿En qué medida el vacío legal del D.S. N° 090-2002-PCM y el Art. 33 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado influyen en los mecanismos de designación de Corredores de Seguros en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018?

1.2.2. Preguntas Específicas

- ¿De qué manera la consistencia del D.S. N° 090-2002-PCM y el Art. 33 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado influye en los mecanismos para la designación de Corredores de Seguros en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018?
- ¿Cómo la estructura de la normativa del D.S. N° 090-2002-PCM y el Art. 33 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado permite la designación facultativa de Corredores de Seguros en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018?
- ¿Cómo el mecanismo de contratación de los Corredores de Seguros entre los años 2017 - 2018 influye en posibles actos de corrupción en dos Instituciones Públicas?

1.3. Objetivos de la Investigación

1.3.1. Objetivo General

Determinar cómo el vacío legal del D.S. N° 090-2002-PCM y el Art. 33 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, influyen en los mecanismos de designación de Corredores de Seguros en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Explicar de qué manera el grado de consistencia del D.S. N° 090-2002-PCM y el Art. 33 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado influyen en los mecanismos para la designación de Corredores de Seguros en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018.
- Analizar cómo la estructura de la normativa del D.S. N° 090-2002-PCM y el Art. 33 del Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, influye en la designación facultativa de Corredores de Seguros en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018.
- Identificar cómo el mecanismo de designación de Corredores de Seguros designados durante los años 2017 - 2018 influye en posibles actos de corrupción en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018.

1.4. Justificación

Se ha elegido este tema debido a la experiencia técnica laboral del equipo de trabajo, el cual ha permitido visualizar, en ocasiones, cómo el vacío legal de la norma ha permitido la designación discrecional de Corredores de Seguros alineados a la toma de mando de los titulares de las entidades analizadas. Es decir, cada titular contaba con su Corredor de Seguros personal, y esta figura no corresponde cuando a entidades públicas refiere. A pesar de ello, se ha observado también que entidades de mayor envergadura o tamaño como los ministerios, han empezado a realizar concursos, lo que permite mayor transparencia en la designación.

Es importante precisar que, el Corredor de Seguros ejerce una función de asesoría y gestión de seguros (en el caso de siniestros es un facilitador) sin recibir honorarios establecidos en ningún contrato; pues sus funciones se realizan a partir de una hoja llamada "Carta de nombramiento". En ese sentido, es la empresa aseguradora contratada por la entidad, mediante Concurso Público; quien calcula una comisión en base a la suma asegurada por cada tipo de seguro adquirido. En este punto, se precisa que las comisiones en el mercado asegurador fluctúan entre el 3 y 10% del Valor o Suma Asegurada, montos muy apreciables considerando los valores comerciales y/o de recupero de los bienes muebles, inmuebles, softwares, etc.

Una vez explicados los motivos de elección de este trabajo de Investigación, debemos decir que lo consideramos importante por dos motivos de peso. En primer lugar, porque es un tema novedoso, debido a su poco análisis y profundización; el mismo que se tangibiliza en una normativa abierta; y en segundo lugar porque se asume que al no existir erogación de fondos públicos, no existe riesgo; algo que nos tomamos la facultad de refutar.

Finalmente, producto del análisis, las autoridades competentes podrían tener en consideración precisar las normas respecto a: las características mínimas requeridas, los honorarios establecidos para este servicio, el seguro de Responsabilidad Civil profesional, acuerdos de confidencialidad, entre otros.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación

2.1.1 Antecedentes Internacionales

Una vez realizada algunas investigaciones previas, señalamos que no es posible relatar hechos de similar característica que se hayan suscitado en otros países, especialmente de la región. No obstante, se ha identificado una situación de obligatoriedad en la contratación de los seguros de propiedad con una única empresa aseguradora, este caso se presentó en Ecuador, el que a continuación se detalla:

En su Tesis de Maestría en Derecho, Lagla tuvo como prioridad el análisis de la consistencia legal, económica y la viabilidad para contratar seguros de forma directa con un único proveedor de Seguros Generales perteneciente al estado ecuatoriano, Compañía de Seguros Sucre S.A.; cuestionando el Oficio circular que obliga a realizarlo. Por otro lado, resalta la importancia de la contratación de los seguros a través de concursos públicos, en cumplimiento a lo normado en el Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador (2016, p.9).

2.1.2. Antecedentes Nacionales

Al tratarse de una observación puntual respecto al otorgamiento discrecional de algunas entidades públicas al asesor o Corredor de Seguros, debido a un vacío o falta de precisión normativa, no encontramos evidencia de antecedentes de similar característica en este país.

2.2. Bases Teóricas

2.2.1. El Seguro y las aseguradoras locales:

La literatura relacionada con el origen de los seguros es muy amplia. Históricamente, los mercaderes europeos adoptaron un espíritu solidario de fondo común en el transporte marítimo de sus mercancías, convirtiéndose en una forma de compensación entre todos los éxitos y todos los fracasos en el transporte naval. En ese sentido, los contratos de seguros inicialmente cumplían el propósito de proteger la mercancía que se transportaba y las propias embarcaciones, tal y como Villegas (2005) afirma: "únicamente protegía la mercadería y los barcos, pero no las personas ni la tripulación" (p.35). Tal situación generó cambios progresivos en el concepto general y específico de los seguros.

Villegas asevera además que, las compañías de seguros como hoy las conocemos dieron inicio al principio solidario o principio de mutualidad; pues especifica que un grupo de asegurados compartían un riesgo común y con la finalidad de cubrir sucesos de pérdida eventuales, se generan progresivamente los elementos técnicos y jurídicos que hoy conocemos (2005:23).

Por otro lado, en la Tesis de grado de Jouvin y Rodriguez (2008) señalan que el seguro es por su naturaleza un contrato de acuerdos previos, mediante el cual el asegurador compensa un daño ante un acto imprevisto acaecido al asegurado; siempre que este haya realizado el pago de una prima. (p.11)

En el mercado asegurador peruano, las compañías que brindan cobertura por Seguros Generales aseguran riesgos por pérdidas y/o daños ocurridos a la salud, al patrimonio y

aquellos riesgos llamados “de garantía”. Por otro lado, las compañías que ofrecen Seguros que cubren riesgos personales o que garantizan en un determinado lapso de tiempo, una compensación económica llamada “renta” para el tomador del seguros o para sus beneficiarios.

En cuanto a las aseguradoras que operan en el Perú, al cierre del primer semestre del 2018, el conglomerado de Seguros lo conforman veinte aseguradoras; de las cuales ocho se concentran en Seguros Generales, seis en Seguros de Vida y seis en los Ramos Mixtos (generales y vida). A esta situación se le conoce coloquialmente como: *"pocos jugadores concentran la mayor cuota del mercado"*.

En la tabla N.º 01 se muestra el listado de compañías aseguradoras por ramos; en los cuales tienen autorizado operar:

Tabla N° 01

Empresas aseguradoras en el Sistema Asegurador peruano

Ramos generales y de vida	Ramos generales	Ramos de vida
Chubb Perú	La Positiva	La Positiva Vida
Cardif	Mapfre Perú	Mapfre Perú Vida
Interseguro	Secrex	Rigel
Rímac	Insur	Vida Cámara
Pacífico Seguros	HDI Seguros	Ohio National Vida
Protecta	Avla Perú	Crece Seguros
	Coface	
	Liberty	

Fuente: *Elaboración S.B.S.*

Una característica importante del mercado de Seguros peruano es la concentración de primas en dos empresas que al 2018 cuentan con una participación total del 57.4%. La empresa con mayor ranking de primas y que lidera el mercado desde hace décadas es la Aseguradora Rímac, con un 30.8%, seguido de Pacífico con 26.6%. Por otro lado, se observa que son cinco las aseguradoras que acumulan el 80% de participación. Se prevé que esta característica se mantendrá en el mediano plazo.

Tabla N° 02
Participación de empresas aseguradoras según primas de seguros netas

Empresas Aseguradoras	Mar.18 (MMS/)	Participación	Participación Acumulada	Mar.17 (MMS/)	Participación
Rímac	931.0	30.80%	30.80%	887.8	31.77%
Pacífico Seguros	804.0	26.60%	57.39%	360.6	12.90%
Mapfre Perú	290.6	9.61%	67.00%	245.6	8.79%
La Positiva	197.4	6.53%	73.53%	182.4	6.53%
Interseguro	195.5	6.47%	80.00%	145.0	5.19%
Mapfre Perú Vida	157.1	5.20%	85.20%	124.9	4.47%
La Positiva Vida	135.6	4.48%	89.68%	120.8	4.32%
Protecta	61.6	2.04%	91.72%	32.3	1.15%
Chubb Seguros	55.2	1.82%	93.55%	50.6	1.81%
BNP Paribas Cardif	53.3	1.76%	95.31%	63.6	2.28%
Vida Cámara	42.3	1.40%	96.71%	36.0	1.29%
Ohio National Vida	38.8	1.28%	97.99%	36.6	1.31%
Crece Seguros	14.9	0.49%	98.48%	10.7	0.38%
Insur	13.3	0.44%	98.92%	15.7	0.56%
Secrex	13.2	0.44%	99.36%	11.4	0.41%
AVLA Perú	12.7	0.42%	99.78%	5.2	0.19%
Coface Seguros	3.2	0.10%	99.88%	1.1	0.04%
HDI Seguros	3.1	0.10%	99.99%	6.6	0.23%
Liberty Seguros	0.4	0.01%	100.00%	-	0.00%
Rigel	0.0	0.00%	100.00%	0.0	0.00%
El Pacífico Vida	-	0.00%	100.00%	357.4	12.79%
Sura	-	0.00%	100.00%	100.0	3.58%
Total	3,023.1	100.00%	100.00%	2,794.3	100.00%

Fuente: *Elaboración S.B.S.*

2.2.2. La transferencia del Riesgo:

El riesgo en su concepto más general advierte la probabilidad de que una amenaza o hecho inminente se materialice. Asimismo; la vulnerabilidad o la inminencia por separado no representan un peligro; pero si se unen en un determinado momento se convierten en un riesgo, lo que a su vez aumenta niveles de probabilidad de ocurrencia del desastre.

En ese sentido, podemos afirmar que el riesgo está íntimamente ligado a la probabilidad y se reafirma en la materialización de un daño. Tal y como lo afirma Cabanellas de Torres (2005) la idea de asegurar los bienes es la prevenir el riesgo inminente ante una contingencia o probabilidad de daño (p. 344).

Por otro lado, podemos aseverar que el riesgo está también relacionado a la incertidumbre o al desconocimiento, siendo así este debe tratarse; y según ISO 31000:2018, entre las acciones de tratamiento de riesgos se encuentra la compartir el riesgo (cláusulas en contratos o comprar pólizas de seguros).

También podemos afirmar que el riesgo es asumido por el ente asegurador, quien a cambio del pago de una prima previamente convenida, realizada esta por el asegurado, brinda la cobertura del seguro a un determinado bien, por un determinado tiempo, según las condiciones preestablecidas en la póliza de seguros o contrato.

Si bien es cierto, en esta investigación se señalan factores de riesgo que hacen vulnerable al estado frente al vacío legal que sostenemos, específicamente nos preocupa cómo abordar técnica y legalmente a una red de corrupción que ha logrado enquistar un mecanismo perverso de aprovechamiento del vacío. Esto no implica necesariamente señalar la existencia de mafias organizadas de forma permanente u ocasional, sin embargo, es indiscutible que poco o nada se ha hecho para soterrar la situación vigente.

En ese sentido, es importante fortalecer los mecanismos de designación con la finalidad de que los operadores no desvirtúen la interpretación de la norma a su beneficio. Estos actos no hacen más que generar perjuicio al estado en los ámbitos económico, social y administrativo.

El perjuicio económico se observa específicamente cuando no se realiza una correcta identificación de los bienes y su valor asegurable, la determinación de los deducibles, la negociación de las tasas y contratos, las exclusiones inexactas descritas en las pólizas, el

derecho a subrogación, la aplicación de infraseguros, la mala gestión de recupero por pérdida de bienes, entre otros perjuicios.

El perjuicio social se tangibiliza en la pérdida de la asistencia del estado a las poblaciones necesitadas al producirse hechos de fraude, corrupción, pérdidas materiales, enriquecimiento ilícito, etc. El estado sólo se empobrece y es la población vulnerable quien se afecta directamente.

El perjuicio administrativo se evidencia cuando malos funcionarios resultan especialistas en la ejecución de actos irregulares y utilizan mecanismos que disfrazan la corrupción como una situación lícita. En el caso de la designación del Corredor de Seguros, las dos normas vigentes señaladas propician esta situación.

Es importante señalar que, postulamos que la investigación y conocimiento del seguro como materia técnica, la gestión que realiza el Corredor (de cara a su cliente y a la aseguradora), la distribución del mercado de Corredores de Seguros y la normativa que regula su actividad; permitirá advertir situaciones adversas a la Ley.

2.2.3. La intermediación en seguros "Corredores de Seguros"

En América Latina, el conocimiento de los conceptos y la utilidad de los seguros para los consumidores son aún muy escasos. Por ello surge la necesidad de la especialización acerca de los productos nuevos o complementarios. Ante este escenario, la figura del Corredor de seguros toma el protagonismo y lo desarrolla a través de su labor de asesoría.

Por otro lado, la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS, 1996), en su Art. N° 338 delimita las Funciones y Deberes de los Intermediarios de Seguros.

Estas funciones y deberes de un Corredor de Seguros, son actividades técnicas, que requieren una especialización y una experiencia en el campo asegurador, lo que permitirá brindar un óptimo servicio. En ese sentido, podemos decir que dicha labor técnica de asesoramiento debe ser asumida por personal calificado, cuya credencial y autorización la brinda la S.B.S, previa evaluación y calificación correspondiente. Esta entidad supervisora es responsable, también, de emitir resoluciones y documentos circulares que norma la actividad, entre las que se encuentran en vigencia:

- a. Resolución SBS N° 1797-2011: “Reglamento del Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros”.
- b. Resolución SBS N° 3199-2013: “Reglamento de Transparencia de Información y Contratación de Seguros”.
- c. Resolución SBS N° 1121-2017: “Reglamento de Comercialización de Productos de Seguros”.
- d. Resolución SBS N° 808-2019: “Reglamento del Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, Empresas de Reaseguros del Exterior y Actividades de Seguros Transfronterizas”.
- e. Resolución SBS N° 809-2019: “Reglamento de Supervisión y Control de los Corredores y Auxiliares de Seguros”.
- f. Resolución SBS N° 810-2019: “Reglamento de Supervisión y Control de Corredores de Reaseguros”.

Por su parte, Bermúdez (2013) afirma que la dispersión de la información entre el asegurado y la aseguradora es tal que se genera la selección adversa, por lo cual surge la necesidad de tomar medidas. (p. 602)

Al respecto, podemos decir que la intermediación de seguros es necesaria en la administración de los diferentes ramos técnicos, considerando que es una actividad que debe ser asumida por profesionales calificados, en este caso los Corredores de Seguros, quienes por su alta preparación brindan asesoría técnica a los usuarios de seguros (privados o públicos), que adoptan la figura del consumidor de seguros, y teniendo en cuenta que es un tema eminentemente técnico, es recomendable que cualquier entidad que necesite adquirir un seguro, lo realice con la asesoría técnica especializada en seguros.

Por otro lado, según información contenida en su portal web y actualizada al mes de julio del 2018, este es el ranking de Corredores de Seguros en el país:

Tabla N° 03
Ranking de Corredores de Seguros (P. Jurídicas), a julio del 2018

N°	N° REG.	RAZON SOCIAL	INGRESOS OPERATIVOS	GASTOS DE PERSONAL	UTILIDAD NETA
1	J0045	MARSH REHDER S.A. CORREDORES DE SEGUROS *	187 282 781	87 964 629	27 553 383
2	J0359	CONTACTO CORREDORES DE SEGUROS S.A.	46 253 790	21 074 694	4 147 596
3	J0387	JLT PERÚ CORREDORES DE SEGUROS S.A.*	46 051 183	26 477 524	(13 819 413)
4	J0658	CORREDORES DE SEGUROS FALABELLA S.A.C.	39 785 000	17 082 000	21 115 485
5	J0414	CONSEJEROS Y CORREDORES DE SEGUROS S.A.	26 953 016	14 351 117	3 636 510
6	J0569	AON GRAÑA PERU CORREDORES DE SEGUROS S.A. *	24 969 049	21 302 902	(6 899 239)
7	J0377	WILLIS CORREDORES DE SEGUROS S.A. *	22 594 631	11 241 000	(531 000)
8	J0288	LA PROTECTORA CORREDORES DE SEGUROS S.A.	15 223 759	5 192 718	744 811
9	J0394	DETEC S.A. ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS	11 351 307	937 258	3 844 898
10	J0311	GABEL CORREDORES DE SEGUROS S.A.C.	11 047 046	1 312 796	4 079 056

Fuente: *Elaboración propia*, SBS.

2.2.4. Vacío legal o laguna jurídica

Cuando se hace referencia a un vacío legal o laguna jurídica, podemos afirmar que ambos términos son discutibles en el ámbito del derecho, en relación a ello Iturralde (1988) los clasifica así:

La doctrina recurre frecuentemente al concepto de “laguna del derecho” por contraposición a “laguna de la ley”, y lo hace más que por razones conceptuales para justificar el aserto según el cual el derecho carece de lagunas, pero la ley puede tenerlas. Así, mientras que las lagunas de la ley van referidas a la falta de una norma legislativa o consuetudinaria, la expresión laguna del derecho aparece como una *contradictio in terminis*, pues el termino derecho significa ordenamiento jurídico y denota aquel complejo de reglas a las que el juez puede (o debe) recurrir para decidir una determinada controversia (p. 350).

En sus tesis de Maestría, Martinez señala que ocurre una laguna normativa cuando una situación particular no puede ser resuelta basada en la normatividad vigente. Para dejar más clara esta idea, la autora afirma que tal situación no tiene consecuencia jurídica por norma (Martinez, 2016:54).

En ese sentido, podemos decir que este vacío se presenta cuando la interpretación de una norma no puede ser resuelta de ningún modo en base a lo preestablecido. Siendo así, podemos inferir que el D.S N.º 090-2002-PCM no presenta lineamientos definidos, lo que permite un mecanismo de nombramiento del Corredor de Seguros “a criterio” del funcionario decisor en las diferentes entidades del estado, observándose un vacío legal o laguna jurídica.

2.2.5. Opinión N.º 184-2018-DTN Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)

Las opiniones emitidas por el OSCE son un mecanismo de absolución de consultas que realizan los interesados (entidades públicas, privadas o personas naturales) cuya naturaleza es la de interpretar las disposiciones de la normativa sobre contrataciones e incluso, integrar las mismas para salvar vacíos o lagunas legales al establecer el sentido y alcance de la norma; por lo tanto son de carácter vinculante.

En ese sentido, en el año 2018 el OSCE emite una Opinión, a través de la Dirección pertinente, la cual resulta como punto de partida para proponer los objetivos de nuestra investigación.

Esta Opinión corresponde a absolver la consulta formulada por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE, 2018) a través del Oficio N° 943-2018/GSC-FONAFE, a saber: “De acuerdo a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento del Registro de Intermediarios y Auxiliares de Seguros, la designación de un corredor de seguros se efectúa y despliega sus efectos a través de una carta de nombramiento. Al respecto, consultamos: ¿La carta de nombramiento a un corredor de seguros materializa una contratación pública bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado?” (Opinión N° 184-2018-DTN, p.2).

A esta consulta, el OSCE consideró lo establecido en la Décimo Octava Disposición Complementaria Final del Reglamento, -según el D.S N.º N.º 056-2017-EF, que modificó el Reglamento de la citada Ley de Contrataciones del Estado, señalando que:

En caso las Entidades decidan contar con un corredor de seguros, su designación debe tener en consideración los principios que rigen las contrataciones, contemplados en el artículo 2 de la Ley. La designación no es remunerada y el período del mismo no podrá exceder de dos (2) años, renovables previo informe sustentatorio.

(OSCE, Opinión N° 184-2018-DTN, p. 2).

La Opinión señala también:

La designación de corredores de seguros, en tanto carezca de remuneración y por ende no irroque gastos al Estado, no reúne el elemento objetivo para la aplicación de la normativa de contrataciones, por lo que dicha actuación se encuentra fuera de su alcance". Concluyendo que: "... cada entidad es responsable de establecer los parámetros que considere pertinentes para la adecuada selección y designación de un corredor de seguros, pudiendo como en todo proceso competitivo, disponer ciertas medidas que sirvan para determinar la opción que mejor se ajuste a sus necesidades, en tanto ello resulte razonable y guarde coherencia con la normativa que regule la materia y con los principios señalados en el artículo 2 de la Ley.

(OSCE, Opinión N° 184-2018-DTN, p. 4).

Según lo señala la mencionada Opinión Técnica del OSCE se puede concluir que:

a) La actividad del Corredor de Seguros en las entidades públicas carece de remuneración y no irroga gastos al estado, por lo cual se encuentra fuera del alcance de la función supervisora del OSCE. En consecuencia, la estructura de la Ley de Contrataciones no resultaría consistente con el mecanismo de designación de Corredores de Seguros, al no ser aplicable al ámbito de su designación.

b) El OSCE no puede pronunciarse sobre los requisitos y/o exigencias mínimas que deben establecerse para la designación del corredor de seguros. En consecuencia, cada entidad del estado será responsable de definir los parámetros que considere pertinentes para la adecuada selección y designación de su Corredor. Por lo tanto, observamos que el OSCE no rectifica ni ratifica que la Carta de nombramiento materializa una contratación pública, con lo cual genera un vacío en el mecanismo de designación y en consecuencia abre la posibilidad de designaciones discrecionales o arbitrarias con implicancia en actos de corrupción.

Asimismo, debemos tener en cuenta que una de las desventajas del "acto discrecional" es que puede entenderse o interpretarse como ajena al principio de legalidad, cuando así se ejecuta, favorece a la corrupción y a la impunidad, como es el de buscar beneficios particulares, más nos los beneficios del bien público o a la comunidad en general que es el objetivo de la administración pública. Considerando que las normas aludidas no obedecen a un criterio técnico refrendado para la óptima designación del Corredor de Seguros en las entidades públicas.

c) La Opinión no absuelve en forma categórica a la consulta; toda vez que, no ha considerado en su pronunciamiento a la Res. SBS N° 1797-2011, que aprobó el “Reglamento Del Registro de Intermediarios y Auxiliares De Seguros”, en su Art. N.º 24

Funciones, deberes y obligaciones de los corredores de seguros, que señala: (...) “*Es función del corredor de seguros, la de representar al contratante y/o asegurado frente a la empresa de seguros lo cual se instrumentaliza a través de la suscripción de la Carta de Nombramiento a su favor, por parte del contratante y/o asegurado. Dicho documento faculta al corredor para realizar actos administrativos de representación, mas no de disposición, surtiendo sus efectos durante la vigencia del contrato de seguros. La Carta de Nombramiento, acredita al corredor de seguros, el derecho a percibir la comisión por la intermediación del contrato por el cual fue emitida, pago que estará a cargo de la empresa de seguros”* (Opinión N° 184-2018-DTN, 2018).

En tal sentido, se infiere que la transacción por el pago de la comisión lo realiza operativamente la empresa de seguros, sin embargo quien ejecuta el abono de la prima es el asegurado/cliente -entidad del estado-, no la aseguradora, con la que el corredor no tiene ningún contrato, más si un mecanismo de "comisión por agenciamiento", regulado por la S.B.S.

d) En cuanto a los Principios del derecho que pudieran vulnerarse producto de la inconsistencia en la norma para precisar el mecanismo de designación del corredor de seguros en las entidades públicas, se han considerado aquellos que señala la misma Opinión, y que se describen en el Art. N.º 2 de la Ley de Contrataciones que se indica, entre ellos resaltamos: **libertad de concurrencia, igualdad de trato y transparencia**. En ese orden de ideas, cabe señalar al Principio de la Legalidad, que es sin duda el de mayor relevancia en el Derecho Administrativo, que señala lo siguiente: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de

las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas” (Ley N° 27444, 2001).

En conclusión señalamos que, los servidores civiles durante el ejercicio de sus gestiones, deben respetar la Constitución, la Ley, y el Derecho. Para lo cual se debe considerar también lo establecido en el Art. 2 Inciso 24.a. de la Constitución Política del Perú, que señala lo siguiente: “Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.”; entendiéndose que todo actuar público debe enmarcarse y actuar conforme a lo establecido en la Ley, y no a la voluntad de las personas, por ende precisamos que el Principio de Legalidad, es fundamental en el Derecho y se enmarca en el Derecho Público – Administración Pública.

e) Finalmente, resulta indispensable mencionar que el 01 de agosto del presente año entró en vigencia la resolución SBS N° 809- 2019, que aprueba el “Reglamento de Supervisión y control de los Corredores y auxiliares de Seguros”, en el cual nuevamente no precisa de forma categórica los mecanismos a considerar para la designación del corredor de seguros en las entidades públicas. No obstante, en cuanto a Comisiones y honorarios, señala: *“34.1 La determinación de las comisiones por la intermediación en la contratación de seguros u honorarios profesionales por asesorías prestadas, sus formas de pago y demás condiciones, se realiza de conformidad con los convenios que libremente celebren los corredores con las empresas de seguros. Lo mismo es aplicable a la intermediación y asesoría de seguros obligatorios y aquellos que se contraten en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N.º 30225 y normas modificatorias o ley que la sustituya), salvo que sus normas específicas establezcan un tratamiento diferente.”* (Resolución SBS N° 809- 2019, Art.34).

En consecuencia, ni la Ley que regula el Sistema Financiero y Seguros, ni el recientemente vigente Reglamento N° 809- 2019 de la S.B.S. hacen referencia a establecerse en forma clara los mecanismos de designación de Corredores de Seguros en las entidades del estado. Sin embargo, el Reglamento señala que la determinación de las comisiones del Corredor de Seguros en las entidades del estado, debe enmarcarse en la Ley de Contrataciones.

2.2.6. Características del D.S. N.° 090-2002-PCM y la conveniencia de su aplicación

La característica más resaltante de este D.S. resulta ser la aparición de la figura del Corredor de Seguros, pues se señala la prerrogativa de la entidad para contratar sus seguros con presencia o no de uno o más Corredores de seguros” (Decreto Supremo N.° 090 - 2002 – PCM, Art. 1).

En ese sentido, señalamos además que en dicho decreto no se especifica el procedimiento para la elección de un Corredor de Seguros. Consideramos también, que esto deja un vacío para la elección facultativa del Corredor de Seguros, y que esta ambigüedad pueda generar criterios subjetivos para la elección del mismo, los que podrían visualizarse como poco transparentes.

Analizando el D.S., se observa un vacío legal, en cuanto al mecanismo de nombramiento del Corredor de seguros; por tanto, podemos señalar que dicha norma, es conveniente en su aplicación; sin embargo, se debió considerar un artículo adicional, en el cual se precise la obligatoriedad para que las Entidades Públicas implementen los procedimientos y/o lineamientos pertinentes, para efectuar el mencionado nombramiento

y contratación. Teniendo en cuenta que dicho mecanismo debería estar enmarcado bajo los principios de Transparencia, Libre Concurrencia y Competencia, tal como lo establecen los Principios de las contrataciones del estado. En adición a ello, permitiría hacer frente a posibles actos de corrupción.

2.2.7. Ley de Contrataciones del Estado, Ley N.º 30225 y sus modificatorias

La Ley, su Reglamento y modificatorias se rigen por diez (10) principios básicos, no obstante se rigen también bajo otros principios del derecho que se apliquen a los procesos de compras en el Perú. Estos principios se señalan en el Art. 2, aprobada por D.S. N° 082-2019-EF.

El objetivo de la norma es la de avalar que las entidades del estado peruano adquieran bienes, servicios, obras y supervisiones con los niveles de calidad requeridos, que se realice en los tiempos previstos, oportunamente, a costos y/o precios adecuados a sus estudios de mercado. Otra finalidad es la de dejar precedente del criterio interpretativo para resolver los cuestionamientos que puedan ocurrir a la ejecución de las normas y que conforman medidas para el desenvolvimiento de los servidores y/o funcionarios. En ese sentido, coadyuvan a sustituir a aquellos vacíos que la normativa, por su naturaleza, podrían contener.

2.2.8. Otras normas aplicables a la contratación e intermediación de seguros

En lo referente a la operación del Corredor de Seguros, la ley precisa su actividad de representación y comercialización al señalar la facultad de éste para actuar en trámites administrativos y de representación, haciendo la salvedad de no disponer o decidir (Ley N° 29946, Ley del Contrato de Seguros, Art. N° 37).

En relación a ello, podemos decir que el nombramiento del Corredor de Seguros señalada en esta Ley Especial se realiza con la carta de nombramiento, la cual le permite realizar actos administrativos de representación. Siendo así, dicho mecanismo normativo de designación ha sido previsto con un enfoque privado, sin considerar que en lo público se prevén otras formas de designación o contratación; considerando que se administran recursos del estado.

Por su parte, la S.B.S. establece las facultades y limitaciones para el otorgamiento de la carta de nombramiento al intermediario, más no precisa los mecanismos que se deben seguir para su designación en una entidad pública, teniendo en cuenta que quien administra y autoriza las actividades del Corredor es la S.B.S.; y que ante cualquier reclamo respecto a los actos administrativos que realice el Corredor de Seguros que representa a una entidad del estado, tampoco existe lineamientos y/o acciones que se deban de cumplir.

2.2.9. Otras normas aplicables a la contratación de Seguros en el estado

Respecto a la obligatoriedad de la contratación de los seguros de propiedad para todos los bienes públicos, el Sistema Nacional de Bienes Estatales (SBN) precisa tal obligación, señalando “... contratar pólizas de seguros para los bienes de su propiedad y los que se encuentren bajo su administración, conforme a la prioridad y disponibilidad presupuestal” (Reglamento de la Ley N° 29151, 2014, Art. N° 10). Esta obligatoriedad se presenta como finalidad de salvaguardar el patrimonio público.

2.3. Operacionalización de variables

Tabla N° 04

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES				
VARIABLE	DEFINICIÓN CONCEPTUAL/ NOMINAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIÓN	INDICADOR
VACIO LEGAL	Se denomina laguna jurídica del Derecho o limbo jurídico a la ausencia de reglamentación legislativa en una materia concreta, la cual tendría repercusión sobre el Ordenamiento Jurídico - Administrativo.	La selección de proveedores (Cias. aseguradoras) y asesores (Corredores de Seguros) en las entidades públicas no presenta actualmente una normativa específica, que señale la igualdad en la participación de proveedores y represente un beneficio tangible al estado.	NORMATIVIDAD	Interpretación
				Estructura
MECANISMOS EN LA DESIGNACIÓN DE CORREDORES DE SEGUROS	Seleccionar al Corredor de Seguros que brinde los servicios de intermediación y asesoría permanente y especializada en la gestión de los seguros, administración de pólizas, atención de siniestros y demás obligaciones que necesita la institución pública.	De acuerdo al Decreto Supremo 090 - 2002 – PCM, las entidades tienen la obligación de contratar seguros de propiedad; de forma directa o con la intervención de los Corredores de Seguros. Por otro lado, en el numeral 3.3 del Art. 33 ° Valor Estimado de los servicios relacionados a los seguros patrimoniales del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, señala lo siguiente: "(...) La Entidad puede solicitar que la cotización de las aseguradoras contenga una estructura de costos que incluya la comisión del corredor de seguros, o convenir dicha comisión con el corredor de seguros nombrado, según carta de nombramiento correspondiente , para incorporarla como parte del valor estimado antes referido" (...).	NOMBRAMIENTO DEL BROKER DE SEGUROS	Cartas de Nombramiento del Corredor de seguros
			EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Grado de satisfacción del servicio - cobertura de los seguros prestados a la entidad.

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y Diseño

Es de tipo Cuantitativa, porque se alinea a una investigación de corte tradicional-clásica; la cual busca establecer relaciones causales entre las variables disponibles y obtener un resultado exacto desde una perspectiva externa y objetiva. Asimismo, el diseño es No Experimental porque se recolectarán los datos directamente de la fuente primaria sin manipulación de variables, tal y como lo señala Kerlinger (1979): "La investigación no experimental o ex-post-facto es cualquier investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones" (p.116). En ese sentido, se alinea a la presente investigación.

Por otro lado, el alcance es Correlacional transversal, puesto que como afirma Moreno (2000), lo que se busca es determinar el grado de relación que hay entre dos o más variables de tipo cuantitativa aplicando el coeficiente de correlación y se considera que la observación y el análisis se da en un mismo lapso de tiempo. (p. 10)

3.2. Población y Muestra

La población elegida la conforma los servidores civiles (funcionarios y no funcionarios) que se desempeñan en los Órganos Encargados de las Contrataciones OEC de dos entidades: Fuero Militar Policial - FMP y el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI; y que además intervienen o han intervenido en la designación del Corredor de seguros, en su respectiva entidad. Siendo un número total de 10 (diez).

En cuanto a la muestra, en este proyecto no procede por tratarse de una población finita.

Tabla N° 05

Personal encargado de las contrataciones de los Seguros de Propiedad y designación de Corredor de Seguros en dos entidades públicas

PERSONAL A ENCUESTAR	INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - INDECI	FUERO MILITAR POLICIAL - FMP
FUNCIONARIOS DE 1° LINEA (ADMINISTRATIVA)		
Jefe de la Oficina General de Administración	01	--
Director Ejecutivo	--	01
FUNCIONARIOS DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES - OEC		
Jefe de la Oficina General de Administración	01	--
Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Contrataciones	--	01
ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Especialista	01	01
ANALISTA EN CONTRATACIONES DEL ESTADO		
Analista	01	01
ASISTENTE ADMINISTRATIVO		
Asistente	01	01
TOTAL	05	05

3.3. Técnicas e Instrumentos

Utilizaremos la técnica de encuestar para recoger los datos y facilitar la interacción con los servidores civiles abordados, este instrumento resulta ser significativo para la investigación de tipo cuantitativa. Esta técnica permite la obtención de información de varias personas cuyas opiniones son de interés. A diferencia de la entrevista, contamos con una batería de preguntas que entregamos (a través de medios físicos o virtuales) a los sujetos. A este listado se denomina cuestionario.

En cuanto a la recolección de datos debemos considerar que el cuestionario entregado no va a requerir el nombre u otra identificación ya que no resulta trascendente para la investigación. Acto seguido, se procederá a registrar la data en tablas estadísticas probabilísticas, ya que al tratarse de una investigación de tipo cuantitativa se analizan los porcentajes calculados con los datos obtenidos. La herramienta informática de trabajo será Excel.

Para proceder con el análisis de la información se ha considerado el marco teórico, el cual servirá como sustento del análisis e interpretación de los resultados.

3.4. Procedimiento o levantamiento de información

Utilizaremos como herramienta de levantamiento de información a la encuesta, la cual será de utilidad para nuestra investigación debido a la flexibilidad de interacción con los sujetos a encuestar; así como su carácter anónimo y uniformizado.

Asimismo, se empleará un listado de ocho preguntas que se proporcionarán de forma física a los operadores logísticos, con la finalidad de que las contesten igualmente por escrito, sin omitir ninguna. A este listado se le denomina cuestionario.

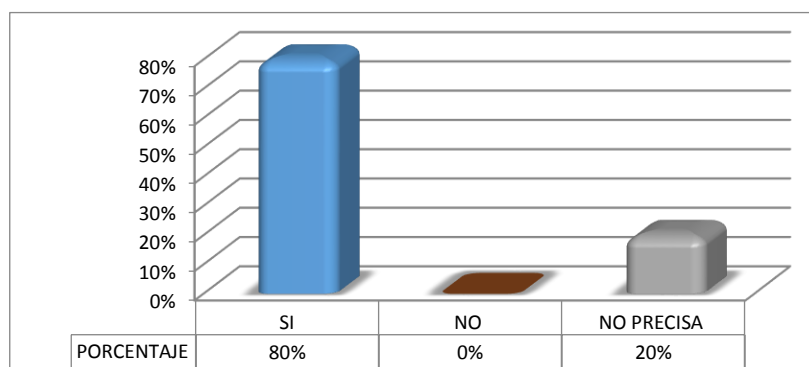
CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

A continuación se procederá a detallar el resultado de cada pregunta y el resultado de su procesamiento:

4.1. Resultados y análisis de la variable: "Vacío legal"

PREGUNTA 1. Respecto a la designación del Corredor de Seguros de su entidad, ¿considera que lo establecido en el Art. 33° del Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado, es pertinente?

ITEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	8	80%
NO	0	0%
NO PRECISA	2	20%
TOTAL	10	100%

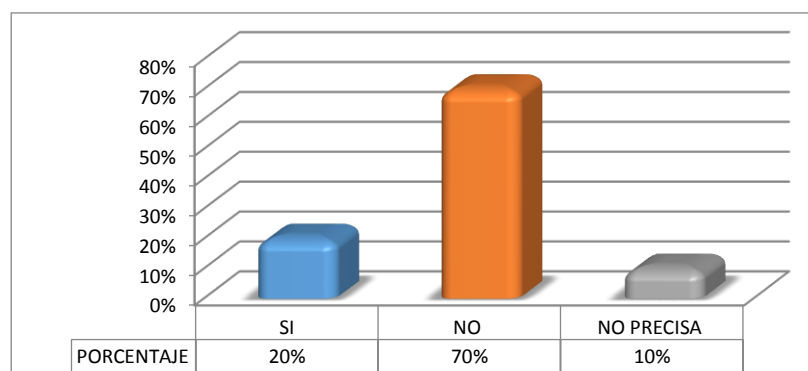


Interpretación

De los encuestados, 2 (20%) de ellos no precisan tener un mayor alcance respecto a lo establecido en el Art. 33° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo 8 (80%) consideran que la norma que se indica, si es pertinente.

PREGUNTA 2. Con relación a la designación del Corredor de Seguros de su entidad, ¿considera que lo establecido en el D.S. N° 090-2002-PCM, es pertinente?

ITEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	2	20%
NO	7	70%
NO PRECISA	1	10%
TOTAL	10	100%

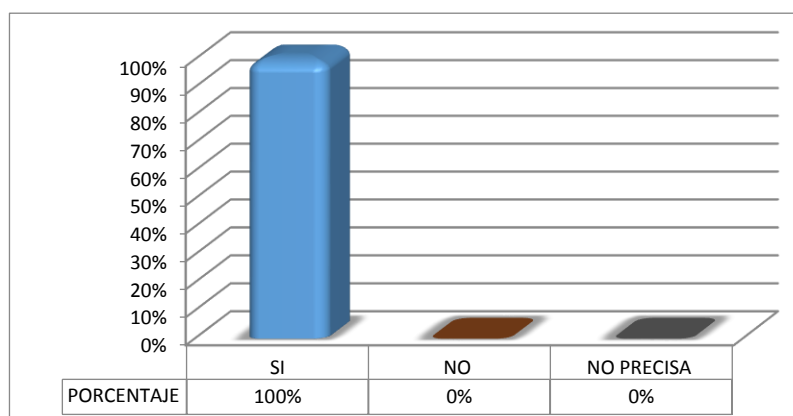


Interpretación

Del total de encuestados, 2 (20%) señalan que es pertinente; sin embargo un 7 (70%) mayoritario señala que el mencionado Secreto Supremo no es pertinente. Finalmente, 1 (10%) no realiza mayor precisión, mostrando probablemente indiferencia o desconocimiento al D.S. N.° 090-2002-PCM.

PREGUNTA 3. ¿Estaría de acuerdo en que la normativa vigente para el nombramiento del Corredor de Seguros se modifique y se especifiquen requisitos mínimos?

ITEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	10	100%
NO	0	0%
NO PRECISA	0	0%
TOTAL	10	100%



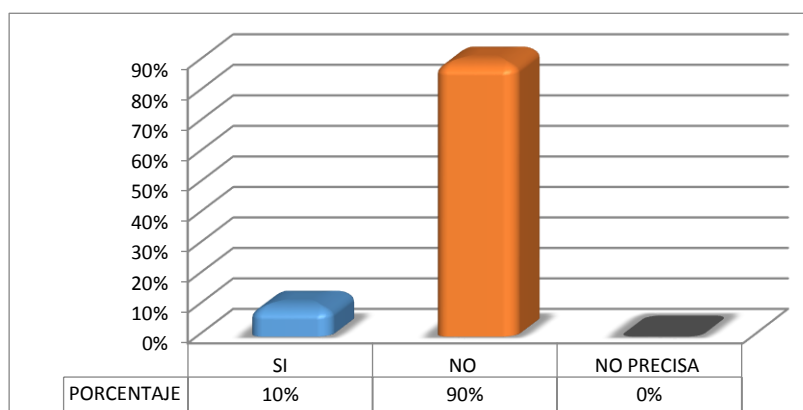
Interpretación

De lo encuestado y analizado, el 100% indica que es positivo o está de acuerdo en que se especifiquen los requisitos mínimos para el nombramiento del Corredor de Seguros.

4.2. Resultados y análisis de la variable: "Mecanismos en la designación de Corredores de Seguros"

PREGUNTA 4. A su consideración, ¿los mecanismos para la designación del Corredor de Seguros de su entidad son los apropiados?

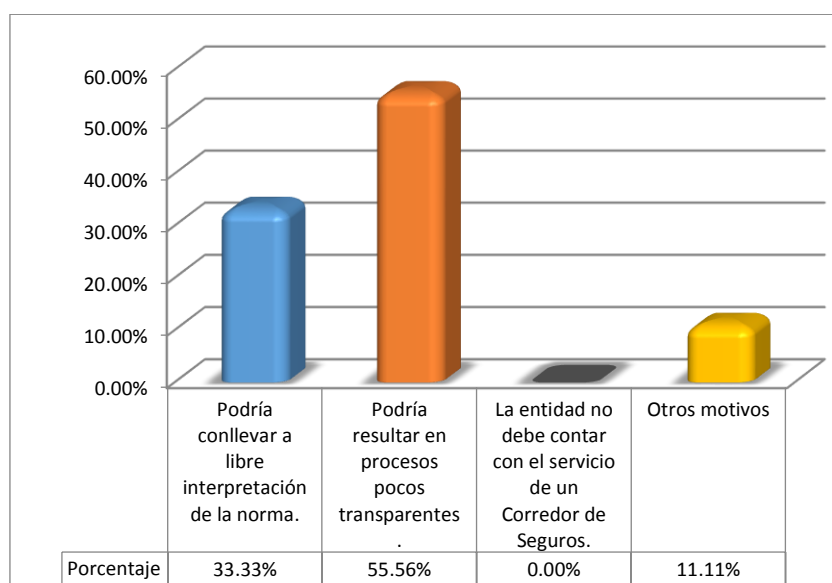
ITEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	1	10%
NO	9	90%
NO PRECISA	0	0%
TOTAL	10	100%



Si la respuesta es SI, continúe en la pregunta 5.

Si la respuesta es NO, responda la siguiente pregunta: Considera que NO es apropiado porque:

- a. Podría conllevar a libre interpretación de la norma.
- b. Podría resultar en procesos pocos transparentes.
- c. La entidad no debe contar con el servicio de un Corredor de Seguros.
- d. Otros motivos.

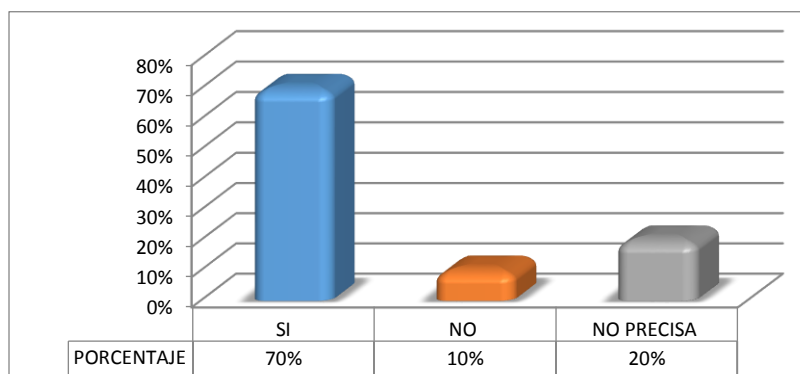


Interpretación

Del total de encuestados, 9 (90%) indican que los mecanismos para la designación del Corredor de Seguros de su entidad NO son los apropiados, solo 1 (1%) dijo que era un mecanismo apropiado. En consecuencia, a la repregunta formulada para aquellos que respondieron que NO, mayoritariamente se inclinaron a señalar que los mecanismos vigentes: podrían conllevar a libre interpretación de la norma o a procesos poco transparentes. Un minoritario 11.11% no señaló que los mecanismos actuales no son los apropiados, pero no se precisa por qué.

PREGUNTA 5. ¿Estaría de acuerdo en que su entidad realice concursos periódicamente en el cual se establezca un perfil profesional para la contratación del Corredor de Seguros?

ITEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	7	70%
NO	1	10%
NO PRECISA	2	20%
TOTAL	10	100%

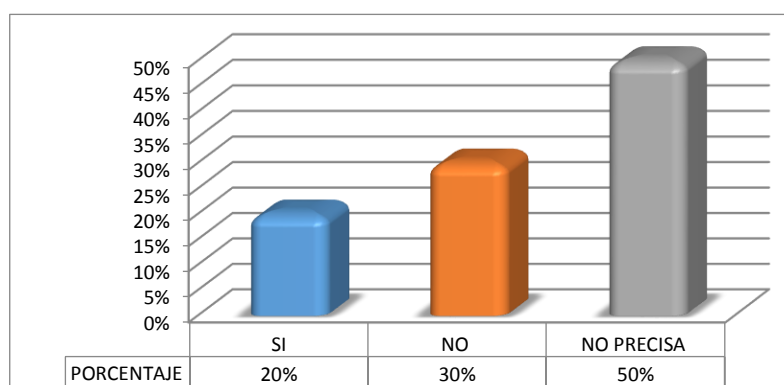


Interpretación

Del total de encuestados, un importante (7) 70% está de acuerdo que su entidad realice concursos periódicamente en el cual se establezca un perfil profesional (requisitos mínimos) para la contratación del Corredor de Seguros.

PREGUNTA 6. ¿Está de acuerdo con el servicio que brinda el Corredor de Seguros de su entidad, en cuanto a: asesoría, indemnización y/o recuperación de pérdidas, calidad y cotizaciones del mercado asegurador, etc.?

ITEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	2	20%
NO	3	30%
NO PRECISA	5	50%
TOTAL	10	100%

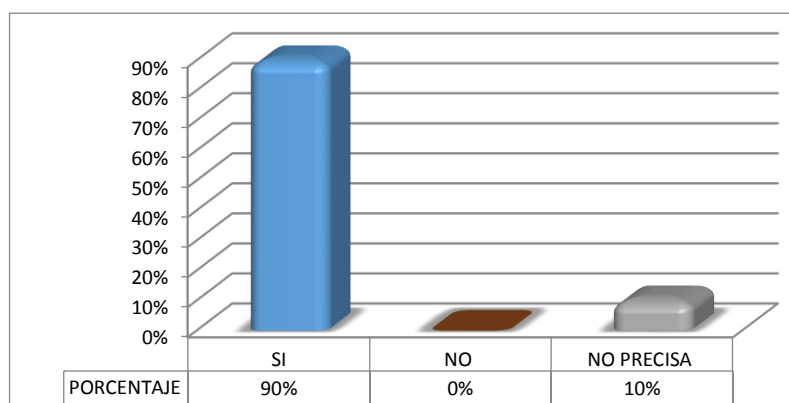


Interpretación

Del total de encuestados, 5 (50%) No Precisa estar o no de acuerdo con el servicio que brinda el Corredor de Seguros, es probable que desconozcan el servicio. Por otro lado, 3 (30%) señala no estar de acuerdo. Finalmente 2 (20%) señalan estar de acuerdo con el servicio.

PREGUNTA 7. ¿Considera que los mecanismos actuales de designación del Corredor de Seguros (con carta de nombramiento), podría inferir en actos de corrupción, como: cohecho, tráfico de influencias, otros?

ITEM	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SI	9	90%
NO	0	0%
NO PRECISA	1	10%
TOTAL	10	100%



Interpretación

Del total de encuestados, mayoritariamente (90%) de los encuestados considera que los mecanismos actuales de designación del Corredor de Seguros (con carta de nombramiento) podría inferir en actos de corrupción, como: cohecho, tráfico de influencias. Finalmente, un 10% no precisa, el 10% restante considera que no conlleva

a hechos de corrupción. Lo que implica que la mayoría considera que la ley es vulnerable y que puede significar la permisividad a actos corruptos.

Al finalizar el análisis e interpretación de las encuestas, señalamos lo siguiente:

Los encuestados mayoritariamente señalaron que las normas no son pertinentes, y con mayor porcentaje cuando se trata del D.S. N° 090-2002-PCM. Asimismo, tal y como se muestra en la pregunta 3, el 100% señaló que la normativa vigente para la designación del Corredor de seguros debe ser abordada y modificada a fin de incluir los requisitos mínimos. De esto, se puede desprender que, la modificación debe implicar la inclusión de la designación del Corredor como un servicio más que utiliza el estado, como lo son las asesorías técnica – especializada, consultorías y servicios similares.

Por otro lado, en la pregunta 5 acerca de la aplicación de concursos periódicos de elección con la inclusión de un perfil profesional, un 70% aprobó la importancia de realizarse periódicamente un concurso de selección, lo que implícitamente requiere la aplicación de factores de evaluación y un perfil mínimo requerido, señalando además el cumplimiento del principio de "libertad de concurrencia".

Las respuestas a la pregunta 7 resultan sumamente representativa, pues un imponente 90% acepta que los mecanismos actuales infieren o permiten situaciones que conllevan a actos de corrupción. Esto es vital pues quienes lo señalan son personas especializadas en contrataciones, quienes conocen la vulnerabilidad de la norma y en su experiencia conocen también las situaciones más comunes de corrupción en contrataciones públicas.

CAPITULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

5.1. Conclusiones

- Como resultado de la encuesta, podemos concluir que se evidencia un vacío legal en las normas aludidas en esta investigación; debido a la inconsistencia de la normativa para la designación del Corredor de Seguros. Por un lado, los encuestados señalan mayoritariamente que el mecanismo no es el apropiado, y por lo tanto podrían generar libre interpretación de la norma y poca transparencia en el proceso; teniendo como consecuencia la viabilidad para actos de corrupción, como: cohecho, tráfico de influencias, entre otros.
- Debido a la debilidad de la norma o vacío legal, las dos entidades encuestadas continúan realizando la designación de su corredor de seguros de forma facultativa por el titular de la entidad o a quien éste designe para tal fin. Esto se asocia siempre al cambio de titular, es decir, éste coloca a su corredor de seguros, pues la norma no se lo impide ni penaliza.
- Entre los riesgos asociados a la designación potestativa del Corredor de Seguros se encuentran los requisitos mínimos exigibles: como la experiencia y suficiencia técnica demostrable, tal y como se solicita en todos los servicios de asesoría. Las entidades solicitan en sus Términos de Referencia adjuntar copias de contratos, facturación y/o conformidades de servicios en entidades públicas y privadas; para corroborar la experiencia en el sector, así como el buen desempeño en entidades previas (públicas y/o privadas).

- Una de las preocupaciones que manifestamos es referente a aquellas entidades públicas que, al no realizar un concurso para la elección del Corredor de seguros, amparados en la ley; continúan realizando la designación discrecional; más aún en el nivel Sub Nacional (Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales). Lo que implicaría designación por afinidad, generándose un posible aprovechamiento y partición de ganancias correspondientes a la comisión de agenciamiento que abonan las empresas aseguradoras al Corredor por la colación de los Seguros, lo que el código penal tipifica como: tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, por tratarse de servidores públicos.

- Del análisis realizado al mecanismo de designación del Corredor de Seguros de las empresas de FONAFE (sectores: hidrocarburos, electricidad, finanzas, saneamiento, infraestructura y entidades por encargo) se observa que éstas deben cumplir con la Resolución de Dirección Ejecutiva N.º 028-2014/DE-FONAFE *“Lineamientos Generales para el Nombramiento de Corredores de Seguros en las empresas bajo el ámbito de FONAFE”*. Donde se especifica un perfil y requisitos de idoneidad para los postulantes a Corredor de las 35 empresas a su cargo. No obstante, otras entidades como los Ministerios, Organismos Constitucionalmente autónomos, Organismos Públicos ejecutores y especializados y universidades están optando por realizar concursos para seleccionar a sus Corredores (con sus respectivas bases). Sin embargo, en sus considerandos mencionan el término “Ad Honorem” o "no se efectuará pago alguno por los servicios brindados por el Corredor de seguros", en alusión a la gratuidad del servicio. Situación que también hemos considerado no real en sus extremos.

- En el marco de los convenios que libremente celebran las empresas privadas con su Corredor de Seguros y las Aseguradoras, según lo señala el “Reglamento de Supervisión

y control de los Corredores y auxiliares de Seguros”, aprobado con fecha 27.02.19; éstas pueden realizar concursos para la elección de su Corredor, en el cual regularmente expresan los requisitos y suficiencias solicitados para decidir por aquel que tenga experiencia, suficiencia moral, les genere menor gasto y mayor recupero por pérdidas o siniestros.

Otro de los mecanismos utilizados es la solicitud de eliminación de la comisión dirigido a la empresa aseguradora, en tal sentido las cotizaciones de éstas incluyen el siguiente texto: "*Sin comisión por Agenciamiento*". En estos casos, la empresa ha acordado en contrato privado con su Corredor el pago de un monto anual por la asesoría y representación, comúnmente llamado FEE.

Finalmente, otro mecanismo utilizado por la privada es la de solicitar a las Aseguradoras la aplicación de "topes" respecto al cálculo de la comisión del Corredor, de esta manera las empresas privadas aseguran un menor gasto. Esto se aplica regularmente cuando las sumas aseguradas son muy elevadas.

5.2. Recomendaciones

- Se recomienda la conformación de una comisión multisectorial de expertos, que revise la casuística del Nombramiento del Corredor de Seguros en las entidades públicas, de manera que se modifique lo señalado en el **Art. N.º 1 del D.S. N.º 090-2002-PCM**, a fin agregar lo siguiente: “*según lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado*”. Esta comisión deberá revisar, como parte de su análisis, el mecanismo de designación que utiliza el sector privado, de manera que rescate las buenas prácticas, la viabilidad y el impacto positivo en el negocio.

- Por otro lado, recomendamos la modificación del **Art. 33** de la Ley y, se recomienda añadir un texto similar a este: "... cuya designación se realice a través de un concurso de selección, el cual no irroque gastos a la entidad, e incluir en sus Términos de Referencia, factores específicos de evaluación establecidos por cada entidad, según sus necesidades." (...)

- Considerando que el OSCE tiene como fin la promoción y supervisión del cumplimiento de la normativa de contrataciones, corresponde a su Dirección Técnica Normativa: "... establecer criterios técnicos legales sobre el sentido y alcance de la norma de contrataciones del estado, evaluar y proponer los proyectos de directivas, documentos estandarizados... para la mejora de la gestión de las contrataciones del estado..." en cumplimiento de su Reglamento Organización y Funciones – ROF vigente. La misma que puede incluir en su propuesta la participación de la S.B.S., como organismo rector en materia de Seguros y Corredores de Seguros.

BIBLIOGRAFIA

Cabanellas de Torres, Guillermo (2005). Diccionario Jurídico Elemental. Buenos Aires: Heliasta, Buenos Aires, Argentina.

Daniela Bermúdez (2013). El Rol del Intermediario de Seguros “Reflexiones comparadas sobre su desarrollo a partir de experiencias internacionales”. Bogotá, Colombia.

Iturralde, Victoria (1988). Análisis de algunas cuestiones relativas al problema de las lagunas jurídicas [artículo]: [///C:/Users/user/Downloads/Dialnet-AnalisisDeAlgunasCuestionesRelativasAlProblemaDeLa-142140%20\(1\).pdf](http://C:/Users/user/Downloads/Dialnet-AnalisisDeAlgunasCuestionesRelativasAlProblemaDeLa-142140%20(1).pdf). Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/>

Jouvin Aráuz, C y Rodríguez Murillo, C. (2008) “Impacto de las Compañías de Seguros en Ecuador: Evolución e Influencia en la economía del país”. Escuela Superior Politécnica Del Litoral, Guayaquil - Ecuador.

Kerlinger, Fn. (1979). Enfoque conceptual de la investigación del comportamiento. México, D.F.: Nueva Editorial Interamericana. Capítulo N° 8 ‘Investigación experimental y no experimental’.

Lagla Chungandro, Fanny del Carmen (2016). Análisis de la contratación directa en el sector público en materia de seguros, con empresas aseguradoras del Estado (Tesis de Maestría). Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.

Martínez (2016) Anomalías Legislativas que Impiden la Ejecución de la Reparación Civil en los Procesos Penales del Distrito Judicial de Arequipa 2012 - 2014 (Tesis de Maestría), Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú

Villegas Carlos Gilberto. (2005). Contratos Mercantiles y Bancarios. Ed. del autor. Bogotá.

D.S. N° 090-2002-PCM. “Autorizan a organismos estatales contratar seguros en forma directa o con la intervención de corredores de seguros”.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificaciones

Ley N° 29946, Ley del Contrato de Seguros, y sus modificaciones

Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y sus modificaciones

Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, a través del D.S N.° 007-2208-VIVIENDA, y sus modificaciones

Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 028-2014/DE-FONAFE Que modifica los Lineamientos Generales para el Nombramiento de Corredores de Seguros en las empresas bajo el ámbito de FONAFE.

ANEXO N.º 01

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO	PROBLEMA	OBJETIVOS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGÍA
Vacio legal del D.S N.º 090-2002-PCM y el Art. 33 del Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado y los mecanismos en la designación de Corredores de Seguros en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018.	<p>PREGUNTA GENERAL:</p> <p>¿En qué medida el vacío legal del D.S N.º 090-2002-PCM y el Art. 33 del Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado influyen en los mecanismos de designación de Corredores de Seguros en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018?</p> <p>PREGUNTAS ESPECÍFICAS:</p> <p>¿De qué manera la consistencia del D.S. N.º 090-2002-PCM y el Art. 33 del Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado influye en los mecanismos para la designación de Corredores de Seguros en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018?</p>	<p>OBJETIVO GENERAL:</p> <p>Determinar como el vacío legal del D.S N.º 090-2002-PCM y el Art. 33 del Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado influye en los mecanismos de designación de Corredores de Seguros en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018.</p> <p>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</p> <p>Explicar de qué manera el grado de consistencia del D.S. N.º 090-2002-PCM y el Art. 33 del Reglamento de la Ley N.º 30225, Ley de Contrataciones del Estado influye en los mecanismos para la designación de Corredores de Seguros en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • VACIO LEGAL • MECANISMOS DE NOMBRAMIENTO 	<ul style="list-style-type: none"> • NORMATIVIDAD • NOMBRAMIENTO DEL BROKER DE SEGUROS • EJECUCIÓN CONTRACTUAL 	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretación. • Estructura. • Cartas de Nombramiento de Bróker de seguros. • Grado de satisfacción del servicio - 	<p>Tipo de Enfoque:</p> <p>Cuantitativa</p> <p>Diseño:</p> <p>Básica o No Experimental de corte transversal</p> <p>Alcance:</p> <p>Correlacional</p> <p>Población:</p> <p>10 personas</p> <p>Muestra</p> <p>10 personas</p>

	<p>¿Cómo la estructura de la normativa del D.S. N.° 090-2002-PCM y el Art. 33 del Reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado permite la designación facultativa de Corredores de Seguros en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018?</p> <p>¿Cómo el mecanismo de contratación de los Corredores de Seguros influye en posibles actos de corrupción en dos Instituciones Públicas?</p>	<p>Analizar cómo la estructura de la normativa del D.S. N.° 090-2002-PCM y el Art. 33 del Reglamento de la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, influye en la designación facultativa de Corredores de Seguros en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018.</p> <p>Identificar cómo el mecanismo de designación influye en posibles actos de corrupción en dos Instituciones Públicas en el periodo 2017-2018.</p>			<p>cobertura de los seguros prestados a la entidad.</p>	
--	---	--	--	--	--	--